

La extrema derecha ante la transición y la consolidación de la democracia (1975-2005)

José L. Rodríguez Jiménez (Universidad Rey Juan Carlos)

Se va a publicar en Canal, Jordi (ed.), *La derecha española en el siglo XX*, Madrid, Dilex, 2009.

La división de la clase política en la crisis del franquismo

Es sabido que cualquier proceso de transición política desde un régimen dictatorial a uno democrático en el mundo occidental tiene mayores posibilidades de verse culminado por el éxito si se cumplen dos condiciones, siendo la principal la segunda. En primer lugar, que nos encontremos en un país atrasado en cuanto a procesos de modernización se refiere. En segundo lugar, que a partir de esa situación y en el transcurso de las décadas siguientes se de una etapa de crecimiento económico y modernización de las estructuras económicas y sociales. Este proceso de transformación permite la aparición de una amplia franja de clases medias y abre las puertas a una serie de cambios culturales y de mentalidad.

Pues bien, el crecimiento económico que tiene lugar en España a partir de la década de los cincuenta, y muy especialmente en el transcurso de los años sesenta, y la modernización y el bienestar material que éste trajo consigo, pese a repartirse de forma muy desigual, proporcionó inicialmente al franquismo amplios apoyos sociales. Y ello pese a que veinte años antes la derrota de las potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial había afectado muy negativamente al gobierno del general Franco, quien había encabezado la coalición victoriosa en la guerra civil que asoló España y puso fin a la experiencia democrática de la Segunda República. No podía ser de otra forma cuando el régimen franquista había sido un estrecho aliado de la Alemania nazi y la Italia mussoliniana. Franco había comenzado tutelando una alianza de la derecha autoritaria, el tradicionalismo, ambas corrientes abanderadas del nacional catolicismo, y el fascismo, pero la necesaria adecuación del régimen al contexto internacional supuso una reducción de las parcelas de poder asignadas a los fascistas agrupados en torno a Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (el partido único creado por Franco en 1937 a partir de la fusión de FE de las JONS y la Comunión Tradicionalista) en beneficio del autoritarismo católico. Después los representantes de esta corriente, una vez cumplida su misión de romper el aislamiento internacional del régimen y muy especialmente de favorecer una mejor relación con Estados Unidos y el Vaticano,

corrieron una suerte similar a los falangistas. Era el turno para los *tecnócratas* vinculados al Opus Dei, un nuevo equipo político al que Franco permitió, más que encomendó, la liberalización de la economía y otras reformas de índole no político.

Las nuevas clases medias no estaban identificadas ideológicamente con el pensamiento de la derecha radical y el fascismo, a diferencia de los grupos civiles que habían apoyado de forma entusiasta la sublevación de julio de 1936, pero apenas mostraron interés en cuestionar el sistema político y una parte sustancial de sus componentes se identificó con la jefatura de Franco. Sin embargo, al mismo tiempo, el desarrollo económico, y con él el proceso de urbanización e industrialización, propició, paulatinamente, importantes cambios de mentalidad y de las pautas de conducta propias del nacional catolicismo, lo que perjudicó los intereses de las instituciones y grupos de poder que se encuentran en los orígenes de la fundación del régimen.

Siendo esto así, no debemos olvidar que para que un proceso de transición política desde un régimen dictatorial a otro democrático tenga lugar es necesario que se den unas condiciones de tipo político relativamente autónomas del desarrollo económico. Esto significa que cualquier aproximación al cambio de régimen que tiene lugar en España tras la muerte de Franco debe ser estudiado prestando especial atención a las diferentes concepciones y estrategias desarrolladas por las fuerzas políticas que participan en el mismo. De igual forma, entendemos que los factores políticos que más influyen a la hora de evaluar la posibilidad de un cambio de régimen en España son la división de la clase política franquista y la sucesión en la jefatura del Estado.

Recordemos que el derrumbe de los regímenes dictatoriales puede producirse como consecuencia de cuatro razones fundamentales: porque el régimen ha cumplido ya con las necesidades funcionales que habían llevado a su establecimiento (por ejemplo, la eliminación de la amenaza que para los grupos conservadores constituía el programa de los republicanos progresistas y los socialistas a comienzos de los años treinta); por haber perdido la legitimidad, apoyo o aceptación que tuvo en su origen; en función de presiones externas que obligan al régimen a vestirse con apariencias democráticas; o bien porque los conflictos existentes dentro del bloque gobernante conducen a una de las fracciones a "apelar al apoyo de grupos externos". Pues bien, es este último factor, la importancia del papel desempeñado por la manifestación pública de divergencias entre los grupos gobernantes, sobre el que más han incidido los análisis dedicados a explicar los procesos de cambio de régimen en el contexto del derrumbe de los sistemas dictatoriales o autoritarios. En opinión de G. O'Donnell y Ph. C. Schmitter no hay ninguna transición

"cuyo comienzo no sea consecuencia, directa o indirecta, de divisiones importantes dentro del propio régimen autoritario, principalmente las fluctuantes divisiones que separan a los *duros* de los *blandos*". Por su parte A. Stepan y A. Przeworski apuntan que la división, o la agudización de la división, de la clase política de un régimen dictatorial debe entenderse a partir de la siguiente circunstancia: es posible que un sector o sectores de la elite política, conscientes de las presiones a las que están siendo sometidos, tanto desde la oposición como desde otros grupos de la clase política del régimen, adviertan que a medio o largo plazo sus intereses podrían ser mejor defendidos en un contexto de instituciones democráticas; y que, para preservar el máximo posible de esos intereses, inicien por sí mismos maniobras para adoptar nuevos posicionamientos (de orientación reformista), alienten la democratización en los grupos rectores del régimen, y busquen el apoyo de fuerzas que hasta el momento han sido excluidas de la vida política por los máximos dignatarios del régimen dictatorial.

Si nos preguntamos acerca de en qué situaciones existen mayores posibilidades de éxito para este tipo de maniobras, la respuesta apunta al momento en que parece previsible el fallecimiento del fundador del régimen. Por lo tanto, la división de la clase política de un régimen tiene mucho que ver con la crisis de sucesión que se manifiesta en un momento dado, y también con otras situaciones que se dan en ese contexto (en el caso español: aumento de la conflictividad social, movilización y protesta de los estudiantes universitarios, fortalecimiento de las fuerzas de la oposición, deterioro de las relaciones entre la iglesia católica y el Estado). Y por supuesto, no se puede olvidar la importancia de otros factores. En el caso español habría que citar el papel desempeñado por el sucesor a Franco, la actuación de la oposición antifranquista, los medios de comunicación, y la participación de los ciudadanos en el proceso.

En definitiva, si pensamos en el cambio de régimen que va a tener lugar en España, los elementos explicativos que deben ser remarcados son las transformaciones operadas en la sociedad, primero a nivel económico y a continuación en el terreno cultural y de las mentalidades, y la nueva coyuntura política que se vive en el país desde mediados de los años sesenta. A partir de esa fecha se abre una crisis en el régimen, pues los cambios económicos y culturales propician un aumento de la conflictividad y la recuperación de la oposición antifranquista, paulatinamente reorganizada en el interior y el exterior de España. Situación que coincide en el tiempo con un aumento de las especulaciones en torno a la sucesión en la jefatura del Estado dado que en 1965 Franco cumple 73 años. Si en el caso español la sucesión en la jefatura del Estado es contemplada con incertidumbre,

esto se debe no sólo al hecho de que siempre sucede así en el caso de los regímenes dictatoriales, sino también porque hasta 1969 continúa pendiente la elección y designación del heredero, y también porque resultaba difícil imaginar que una vez muerto Franco el sistema político imperante permaneciese inalterable.

Tanto el aumento de la conflictividad como la incertidumbre respecto al futuro político del régimen son elementos que crean división en el seno de la clase política y estimulan la adopción de posicionamientos reformistas. Pues no existe unanimidad en cuanto a la forma en que los conflictos deben ser afrontados y tampoco respecto a cómo debe prepararse la sucesión: mientras que los sectores inmovilistas sienten que esos conflictos erosionan al régimen y que en consecuencia la reacción debe ser enérgica, de mano dura hacia todos los grupos opositores, y de defensa a ultranza del sistema dictatorial, los aperturistas, quienes perciben la divergencia creciente entre la sociedad y las instituciones, apuestan por correr riesgos en el sentido de ensanchar la base social del régimen y proceder a una apertura del sistema político mediante la reforma controlada de los mecanismos de participación de los ciudadanos en la vida política, la cual debería tener lugar preferentemente antes de la sucesión. Paulatinamente, una parte de los aperturistas se inclina por la reforma del sistema político y por la negociación con la oposición moderada.

Cuando esta situación se produzca la extrema derecha acusará a los aperturistas de traidores y apelará con un discurso numantino a la defensa de las esencias del régimen.

El neofranquismo

La percepción de los cambios experimentados por la sociedad española y sobre todo el temor que les suscita la sucesión en la jefatura del Estado, con un Franco enfermo y próximo a cumplir los ochenta años, conduce a los sectores neofranquistas y neofascistas hacia un proceso de reorganización interna y a poner en marcha campañas de propaganda con las que intentar movilizar a las bases sociales del régimen. Estas campañas de propaganda dieron la impresión de tener un éxito considerable por dos razones. En primer lugar, porque dentro de las filas franquistas la extrema derecha era el único grupo político que parecía en disposición de apelar a la calle para movilizar a sus simpatizantes y a las bases sociales del régimen en general, lo cual podía hacer dentro de la legalidad, a diferencia de la izquierda, obteniendo de esta forma una repercusión en los medios de comunicación. En segundo lugar, porque la extrema derecha trató de identificar sus intereses con los del régimen, y para ello obtuvo ciertos apoyos desde departamentos gubernamentales y militares, lo que le permitió alcanzar mayor visibilidad y hacer creer a

los observadores políticos que las organizaciones neofranquistas tendrían un considerable peso político tras la muerte de Franco.

Tanto la extrema derecha neofranquista como los falangistas fueron conscientes de que limitarse a contemplar desde dentro de las estructuras creadas por el régimen (es decir, desde el Movimiento, heredero del partido único) la marcha de los acontecimientos significaba una muerte política segura. En consecuencia, dado que los partidos están prohibidos, van a organizarse en una serie de asociaciones desde las cuales harán todo lo posible por cerrar las fisuras aparecidas en la estructura del régimen y mantener vivos los presupuestos ideológicos del primer franquismo. Estas asociaciones son, en la órbita fascista, Círculos Doctrinales José Antonio, Frente de Estudiantes Sindicalistas, Falange Española de las JONS (refundación del principal partido fascista español), todas ellas de tendencia neofalangista, y, de mayor importancia, dos asociaciones de tendencia neofranquista y enraizadas en la ideología del nacional catolicismo: Fuerza Nueva y la Confederación Nacional de ex Combatientes.

El origen de Fuerza Nueva se encuentra en la creación, en mayo de 1966, de Fuerza Nueva Editorial, y en la edición de la revista semanal *Fuerza Nueva* a partir de enero de 1967; sobre esta base se organiza una asociación política y, ya en 1976, un partido político que se convertirá en la principal formación de extrema derecha en los años de la transición y consolidación de la democracia en España. El 4 de febrero de 1967 Blas Piñar, presidente de la organización, escribe en sus páginas un duro alegato contra la política del gobierno:

"Se ha demostrado que los grupos subversivos tienen hoy una capacidad de maniobra de la que carecían (...) Ello demuestra dos cosas: su incrustación y enroscamiento en los cuadros de las organizaciones legalmente establecidas y la utilización de sus nombramientos como defensa contra las detenciones previas, que hubieran desarticulado la agitación subversiva".

Es decir, que había *infiltrados* en las estructuras del régimen, *traidores*. Y contra ellos había que luchar. Por este motivo el fin perseguido por Fuerza Nueva en el momento de su fundación va a ser el de constituir un grupo de presión capaz de aglutinar tanto a los franquistas nostálgicos del espíritu de la *Cruzada* como a los jóvenes militantes identificados con las corrientes ultranacionalistas, falangistas y del integrismo católico, y hacer posible la continuidad del régimen a la muerte de Franco. Se trata de una formación que pretende imponer su ideología en tanto que dogma de fe: unos principios "inamovibles para la subsistencia de la Nación y para el cumplimiento de los fines del Estado", opuestos

al pensamiento racionalista, al liberalismo político, y a la liberalización de las costumbres. La opinión de Piñar respecto a una posible reforma o apertura del régimen queda perfectamente reflejada en un artículo en el que escribe que la filosofía del franquismo "se basa en una inamovilidad constitucional absoluta si pretende ser auténtica" y que es "una equivocación creer que el Sistema recibe su perfección política y semántica a través de conquistas de libertad de palabra, de apertura, de opinión".

A lo largo de este período Fuerza Nueva y las hermandades de ex combatientes franquistas en la guerra civil, en ocasiones con la colaboración de grupos falangistas, convocan numerosos mítines por toda la geografía española en los que exaltan la figura de Franco y el espíritu de la *Cruzada*, al tiempo que acusan a los aperturistas de traición a los presupuestos ideológicos del franquismo y de haber permitido que el régimen fuera infiltrado por sus enemigos. En esta línea Piñar ha declarado años después: "Aparecimos a la vida pública sencillamente porque nos encontramos unos puestos vacíos". Y se ha referido a la necesidad de "cubrir unas trincheras que creímos cubiertas". Con estas palabras Piñar acusaba a los aperturistas, y también a una parte de los ministros de tendencia tecnocrática, de traición a las esencias del régimen: el enemigo, dirá en enero de 1972 en Barcelona, "está muy cerca y muy dentro, y si está muy cerca y muy dentro es porque alguien le ha abierto las puertas con una política torpe". Obviamente, este lenguaje constituía una crítica a un gobierno que en realidad era poco o nada propenso a reformas de tipo político, a las que se oponía el jefe del Estado, general Franco, cuya capacidad para tareas de gobierno se había deteriorado seriamente, y la mano derecha del dictador y vicepresidente de gobierno, el almirante Carrero Blanco, quien gozaba de buena salud y cuyo posicionamiento inmovilista era de sobra conocido. Y lo mismo hay que decir de la alta cúpula militar, aferrada a posiciones inmovilistas, a la retórica sobre la *subversión*, y a la reclamación al gobierno de *mano dura* frente a la oposición.

Esto no impidió que ese tipo de acusaciones fueran muy frecuentes en boca de los dirigentes de las asociaciones neofranquistas y neofalangistas, respaldados por las sucesivas intervenciones de los militares *duros*, quienes reivindicaban que el Ejército asumiera competencias políticas para recuperar la iniciativa; entre ellos figuran los generales: Tomás García Rebull, designado capitán general de Madrid tras la crisis abierta a finales de 1970 por las repercusiones del proceso de Burgos contra terroristas de ETA; Alfonso Pérez Viñeta; Manuel Chamorro, capitán general de Sevilla y especialista en lucha contra la *subversión*; Ángel Campano, que pasa del mando de la División Acorazada Brunete a la capitánía general de Burgos, y Carlos Iniesta, director de la Guardia Civil. La tensión

aumenta tras el asesinato del almirante Luis Carrero Blanco, quien acababa de ser nombrado jefe del gobierno, por un comando de la organización terrorista ETA el 20 de diciembre de 1973. La muerte de Carrero, un duro golpe para los inmovilistas, no hizo sino reafirmar al sector más intransigente, al *búnker* franquista, en su creencia en la necesidad de reaccionar de forma enérgica ante el deterioro del régimen. Más aún cuando el nuevo jefe de gobierno, el *duro* Carlos Arias Navarro, decidió seguir los consejos de su equipo de asesores y presentar al país un programa de reforma de los mecanismos de participación política, una reforma muy limitada y que avanzaría a duras penas (una restrictiva ley de asociaciones políticas, a las que se obligaba a aceptar los parámetros ideológicos del franquismo), pero reforma al fin y al cabo. Aunque Arias no era precisamente un aperturista, a partir de ese momento se van a suceder los ataques de los inmovilistas a su gobierno.

En su labor de cerco y asedio la extrema derecha no dejará de aprovechar los numerosos conflictos a los que hubo de enfrentarse el nuevo gobierno. En primer lugar, las protestas y atentados que, a comienzos de 1974, tienen lugar en distintos países europeos contra embajadas españolas y establecimientos comerciales relacionados con España en protesta por la ejecución de un militante anarquista y un ciudadano polaco, acusados de la muerte de dos policías. A continuación, en abril, el golpe militar portugués que ponía fin al gobierno de Marcelo Caetano, heredero de la dictadura ultraconservadora de Salazar. Dos meses después un nuevo golpe militar, en esta ocasión en Atenas, provocaba la caída de la dictadura griega. Ninguno de estos cambios políticos podía representar un signo tranquilizador para la extrema derecha española de cara al proceso de sucesión en la jefatura del Estado. Asimismo hay que citar una coyuntura económica internacional muy negativa, simbolizada en la crisis del petróleo, el empeoramiento del orden social como consecuencia de abundantes conflictos laborales y la reorganización y creciente actividad de la oposición antifranquista. Las declaraciones de los portavoces de la extrema derecha subieron de tono, y también las acusaciones a los *traidores*, manejados por la *anti-España*. El 28 de abril de 1974, tres días después del golpe militar en Portugal, José Antonio Girón, ex ministro de Trabajo, falangista y figura principal en el búnker franquista publicó un manifiesto en el diario ultraderechista *El Alcázar*. El texto está cargado de agresividad y de desconfianza hacia la futura monarquía:

"Lo que se pretende en nombre de no se qué extraña libertad es olvidar el compromiso sagrado que contrajimos con el pueblo español quienes un día nos vimos en el deber inexcusable de empuñar las armas y vimos morir a nuestros mejores camaradas para que España siguiese viviendo. Olvidar esto, olvidar que miles de hombres jóvenes hicieron

de su muerte un acto de servicio constituiría en nosotros una traición, y en quienes nos incitan con sus actos a ello, un crimen que no perdonaremos.

Proclamamos el derecho de esgrimir frente a las banderas rojas las banderas de esperanza y realidades que izamos el 18 de Julio de 1936 aunque a ello se opongan los falsos liberales o quienes, infiltrados en la Administración o en las esferas del Poder, sueñan con que suene vergonzante la campanilla para la liquidación en almoneda del Régimen de Francisco Franco (...) quienes sin adoptar la gallarda posición del adversario en campo abierto se infiltran a favor de la noche y de las sombras en la estructura del Régimen para socavarlo al amparo de la Traición".

En julio nace la Confederación Nacional de ex Combatientes bajo la dirección precisamente de Girón. Su objetivo es aglutinar en una nueva y más influyente organización al conjunto de hermandades de ex combatientes franquistas en la guerra civil conformadas entre finales de la década de los cincuenta y comienzos de los sesenta: Hermandad Nacional de Alféreces Provisionales, de la División Azul, de Antiguos Combatientes de los Tercios de Requetés, de Sargentos Provisionales, de Caballeros Legionarios, de Marineros Voluntarios y de Banderas de Falange. El artículo primero de los estatutos de la Confederación establece como fines de la organización los siguientes: "coordinar y fortalecer las actividades de las distintas Hermandades y Asociaciones de Excombatientes dentro del común ideal de pervivencia y solidez de los Principios del 18 de Julio", y "procurar la transmisión de los mismos como el más preciado legado a las nuevas generaciones".

En los meses siguientes se suceden los artículos, declaraciones y discursos de los principales representantes del *búnker* franquista. Siempre para atacar el tenue aperturismo del programa gubernamental. Repiten el grito que han llevado a la calle: "¡No queremos apertura! ¡Queremos mano dura!". En ellos se percibe el objetivo de boicotear la acción del gobierno y empujar al presidente Arias a un callejón sin salida que propicie la llegada de un militar de línea dura a la jefatura del gobierno. Además, el recuerdo y la exaltada invocación de la guerra civil se hace cada vez más presente, llegando a la incongruencia de considerarla como un conflicto no terminado, lo que haría que difícilmente el franquismo pudiera ser concebido como un régimen de *orden y paz social* tal y como se había repetido durante más de tres décadas. En los discursos que pronuncia Piñar en los mítines que le llevan a recorrer la geografía española a lo largo del verano y el otoño de 1974 encontramos el mismo tono amenazante frente a los aperturistas, los *traidores*, la acusación de debilidad al gobierno y un rechazo explícito a la figura de Arias. En el transcurso del acto de presentación de un libro de Carrero Blanco en la sede de Fuerza Nueva el 20 de mayo, seis meses después del asesinato del almirante, Piñar quiso "gritar a

los españoles que pese al parte de guerra a cuyo conjuro se depusieron las armas, la guerra no ha terminado". En septiembre el distanciamiento de Fuerza Nueva respecto al gobierno alcanza su punto culminante en un artículo de Piñar, con el título de "Señor Presidente", redactado poco después de producirse un atentado de la banda terrorista ETA en Madrid que ocasiona 11 muertos y cerca de 80 heridos:

"Señor Presidente (...) Nos autoexcluimos de su política (...) Pues bien, nosotros no queremos ni obedecerle ni acompañarle. Pero fíjese bien en quiénes le acompañan y a dónde le acompañan".

Unas semanas después la Confederación Nacional de ex Combatientes emite una declaración de contenido asimismo muy agresivo frente a los reformistas y la oposición antifranquista, hasta el punto de presentar a sus afiliados como "combatientes de España":

"Partimos del hecho irrevocable del 18 de Julio de 1936 (...) No somos excombatientes. Somos combatientes de España y de la revolución nacional (...) Por ello aspiramos a que el régimen político al que somos fieles cumpla su compromiso revolucionario. En este orden es posible la paz. Pero sin justicia la paz no es posible ni deseable".

Ese mismo día, 16 de noviembre, Girón clausuró la asamblea de la Confederación con un discurso muy similar en su tono y su contenido:

"Nos incumbe la misma responsabilidad que por razones de honor nos echó al monte en 1936 (...) Aquí han pasado muchas cosas y van a pasar muchas más (...) Nos impulsa el deber de cerrar el paso a quienes quieren arrebatarnos la victoria".

La extrema derecha en la transición política a la democracia

Cuando Franco muere en la cama de un hospital madrileño el 20 de noviembre de 1975 y, a continuación, es coronado rey de España quien el dictador ha designado para sucederle en la jefatura del Estado, Juan Carlos de Borbón, la todavía poderosa extrema derecha española se moviliza para cumplir un doble propósito. Rendir homenaje a su *caudillo*, reiterando en un momento crítico un afán de homenaje y fidelidad a quien les condujo al triunfo en el campo de batalla y asumió todos los poderes a lo largo de cuatro décadas. Y desplegar sus influencias para impedir que se hagan realidad tanto los anhelos de la oposición antifranquista como los preparativos hechos por los reformistas situados en las estructuras del régimen, en el sentido de controlar el proceso de transición y dirigir la nueva etapa política que se abre en la historia de España.

Para tratar de hacer fracasar el proceso de transición política, que la mayor parte de los ciudadanos desean que desemboque en la restauración de la democracia, las organizaciones de extrema derecha van a repetir la estrategia desestabilizadora utilizada en los años treinta contra la Segunda República Española. Es decir, los verdaderos conspiradores van a tratar de justificar su rechazo frontal a la democracia, en defensa de privilegios políticos y económicos, con el argumento de que la democracia es negativa para España. La *prueba* de que esto es así se encontraría en el fracaso de la Segunda República (al que tanto había contribuido la derecha antidemocrática) y en el supuesto de que los defensores de la democracia eran todos ellos parte o instrumento de la *anti-España*.

Sin embargo, la conspiración urdida por ultraderechistas y neofascistas va a fracasar, pues afortunadamente las cosas transcurren de forma distinta a como acontecieron en los años treinta. En el primer gobierno de la Corona, formado en enero de 1976, entraron algunas personalidades de las filas reformistas para arropar a Arias, el último jefe de gobierno nombrado por Franco. Este gobierno se estancó en el continuismo, incapaz de abrir un proceso de reforma negociado con una parte de la oposición, más por el peso de sus intenciones que por el de sus orígenes. El rey Juan Carlos I, quien parecía haberse inclinado en un primer momento por una reforma política de signo moderado, pronto se vio obligado a contemplar con preocupación el fortalecimiento de la oposición, cada vez más presente en las calles de las grandes ciudades, y el deterioro de la situación económica. Para mediados de 1976 el rey y su equipo de asesores estaban convencidos de la necesidad de impulsar con rapidez una reforma política de signo democrático, lo que equivalía a una ruptura de la legalidad heredada del franquismo, es decir, una ruptura pactada con la oposición. El 1 de julio Arias fue cesado y sustituido por Adolfo Suárez, ex director de Televisión Española y entonces ministro, quien hizo suyo el programa reformista con decisión y audacia. Suárez y sus asesores perfilaron un programa de reforma que acabaría concretándose en un proceso constituyente a partir de la legalidad entonces vigente, las Leyes Fundamentales franquistas.

El primer paso fue la legalización de las fuerzas políticas y sindicales que representaban a la oposición, con la excepción del Partido Comunista de España, el cual tuvo que esperar para su legalización a unas semanas antes de las primeras elecciones legislativas. La respuesta de la extrema derecha y los neofascistas no se hizo esperar. El 18 de septiembre Albert Riguet escribió en *El Alcázar* lo siguiente: los cambios citados responden "a las directrices generales impartidas por el Gran Oriente de Francia durante la reunión de dirigentes de partidos comunistas europeos, celebrada en París a comienzos de

este año". Como en otras ocasiones las interpretaciones complotistas no daban para mucho. Por su parte *Fuerza Nueva* resumía su posición con el siguiente titular:

"Las últimas decisiones políticas parecen a todas luces un calco de las pretensiones de las logias. Tal vez la reforma no esté hecha por masones, pero todo da a entender que se ha obrado como siguiendo consignas de las sectas".

Como vemos, la *conspiración* es básicamente obra del comunismo y la masonería, mientras al judaísmo se le cita en escasas ocasiones. No es que el componente antisemita no haga acto de presencia durante estos meses, es que en la mayor parte de los casos quienes lo utilizan son asociaciones neofascistas y neonazis, como CEDADE, que se encuentran ante un rechazo frontal desde el conjunto de la sociedad española.

En el transcurso de las semanas siguientes el gobierno asumió la elaboración de un proyecto de Ley para la Reforma Política que debía ser llevado a las Cortes, las últimas Cortes de Franco, para su aprobación. Suárez obtuvo un éxito de enorme trascendencia cuando el 18 de noviembre la cámara aprobó la ley por un amplio margen: 425 votos favorables frente a 13 abstenciones y 9 votos negativos. El deseo de cambio en el conjunto de la sociedad española, la voluntad reformista del gobierno, el peso de los reformistas en las instituciones, y el aislamiento en que para entonces se encontraba el búnker franquista, son todos ellos elementos que se reflejan en el resultado de la votación.

Con el término *búnker* hacemos referencia a un conjunto de personas afectas a posiciones inmovilistas y situadas en las instituciones. Es decir, se trata de un frente de resistencia al cambio en el que están presentes políticos, empresarios, miembros del clero y la jerarquía católica, periodistas y jefes y oficiales del ejército, aunque no siempre bien sincronizado. Sus pilares más sólidos los encontramos en las Cortes, el Consejo Nacional del Movimiento, Organización Sindical, Consejo del Reino, los medios de comunicación y las Fuerzas Armadas. Más que a una ideología o a un programa determinado, *el búnker* nos remite a la forma de defender los valores impuestos por los vencedores en la guerra civil y unos intereses políticos y económicos concretos. Entre sus representantes figuran los ya citados Girón, como elemento principal, y Piñar, los falangistas Raimundo Fernández Cuesta, Manuel Valdés, Francisco Labadíe y Jesús Suevos, los tradicionalistas José Luis Zamanillo y José María de Oriol, el ideólogo del *Estado de obras* y ex ministro Gonzalo Fernández de la Mora, los sindicalistas Juan García Carrés y Dionisio Martín Sanz, el obispo de Cuenca, Guerra Campos, el arzobispo de Madrid, Casimiro Morcillo, los cardenales Quiroga y Palacios y Arriba y Castro, y los generales ya citados, a los que hay

que añadir los nombres de Jaime Milans del Bosch, presidente de la junta de fundadores y del consejo de administración de Diarios y Revistas S.A., sociedad editora del diario *El Alcázar*, que en junio de 1975 se ha convertido en portavoz de la Confederación de ex Combatientes, y quien conserva mando en tropa, nada menos que la División Acorazada Brunete, así como Coloma Gallegos, Ramírez de Cartagena y González Aller, y el teniente general Fernando de Santiago, quien ha presentado la dimisión a Suárez (quien lo hereda de la etapa Arias) como vicepresidente del gobierno para Asuntos de la Defensa en el mes de septiembre, y varios periodistas, como Antonio Gibello y Antonio Izquierdo,

Parece lógico pensar que, una vez que culmina con éxito la primera fase de la transición son precisamente los partidos de extrema derecha los más obligados a renovar sus argumentos y la estrategia política; pues ya no se trata de defender un régimen sino de construir una alternativa. Sin embargo, su programa y su discurso apenas son retocados y permanecen muy vinculados a las esencias de la dictadura, sobre todo a la etapa de la *Cruzada* y los años de la posguerra, los más duros del franquismo. Para entender esta situación debemos tener en cuenta que en España las posiciones doctrinales y programáticas de las formaciones de extrema derecha apenas fueron retocadas entre el término de la guerra civil en 1939 y mediados de la década de los ochenta. La prolongación de la dictadura franquista y la participación de la extrema derecha y de los fascistas en el reparto del poder son factores determinantes para que queden reducidos a una minoría quienes propician una modernización en términos ideológicos, pues normalmente quienes forman parte del poder político no consideran conveniente renovar su base ideológica y programática. Asimismo, la larga duración de la dictadura favorece la continuidad de los principios del tradicionalismo y el fascismo en tanto que fuentes de inspiración de las nuevas organizaciones que se crean en la etapa final del régimen y tras la legalización de los partidos políticos en 1977. Un ejemplo de esta realidad, entre muchos otros, nos lo ofrece la Declaración Programática de Fuerza Nueva, de fecha 5 de julio de 1976:

"Fuerza Nueva se propone como asociación política mantener en la nación tres fidelidades:

Primera: a los ideales del 18 de Julio, es decir, a la doctrina religiosa, política, social y económica que dio origen al Alzamiento Nacional.

Segunda: al recuerdo y a la obra de Francisco Franco, Caudillo de la Cruzada y artífice del Estado nuevo.

La fidelidad al recuerdo y a la obra de Franco no suponen de ningún modo una postura estática, sino una tarea de depuración y continuidad perfecta, tomando como esquema orientador los Principios del Movimiento y las Leyes Fundamentales que integran el ordenamiento constitucional.

Tercera: a la monarquía católica tradicional, social y representativa, instaurada por el Régimen que nació de la Cruzada".

Es evidente que hasta fechas recientes los dirigentes de la extrema derecha española han vivido casi completamente al margen de los debates a nivel internacional sobre la derecha y el conservadurismo, siendo incapaces de cambiar su imagen y de conectar con los ciudadanos, a diferencia de lo sucedido en otros países europeos. Y esta situación, la vinculación al modelo de la vieja extrema derecha, va a permanecer casi inalterable en los años siguientes. Es decir, la crítica destructiva al régimen parlamentario no viene acompañada de nuevas propuestas, de forma que los programas quedan reducidos a un inventario catastrofista. Sin embargo, este perfil general quedaría incompleto si no hiciésemos referencia a dos proyectos cuya finalidad fue precisamente la de buscar una nueva imagen y una nueva forma de hacer política en el campo de la extrema derecha. En primer lugar, debemos hacer mención a la creación en 1976 de Falange Española Auténtica de las JONS. Este partido centró su estrategia en intentar desvincular el nombre de Falange del franquismo y de la historia oficial del falangismo, así como en reivindicar un proyecto de revolución nacional cuyo fin habría de ser la instauración de la República Sindical. Se trataba, en esencia, de utilizar una simbología falangista renovada, incluso camuflada en ocasiones, buscando la inspiración en los textos y la iconografía de la izquierda, algo que ya había hecho el neofascista Movimiento Social Italiano (MSI). Los dirigentes del partido creían, erróneamente, que de esta forma conseguirían una mayor aceptación de sus propuestas. El segundo proyecto tiene su origen en una escisión en Fuerza Joven, la sección juvenil de Fuerza Nueva, a partir de un núcleo de militantes que reclama una mayor autonomía respecto del partido. Este grupo, relacionado con las corrientes neofascistas europeas, y descontento con la línea confesional e integrista impuesta por el grupo de Piñar, era partidario de que, además del partido, existiera una "vanguardia más radicalizada, más militante, más activista y callejera", la cual debía actuar de forma autónoma sin poner en peligro la imagen del partido. Así, debía de existir un grupo parlamentario y otro extraparlamentario, ligados por la misma estrategia global. Con este objetivo un sector de los cuadros más activos de Fuerza Joven creó en Barcelona, en septiembre de 1977, el Frente Nacional de la Juventud (FNJ.). El FNJ, cuyo nombre está tomado de la sección juvenil del MSI, el Fronte Nazionale de la Gioventú, se propuso crear un nuevo estilo para las *fuerzas nacionales*, el cual debería permitir sentar las bases para la futura conformación de un partido neofascista. Se trataba de mantener la fidelidad a los

orígenes, pero recurriendo a una propaganda que, de acuerdo con los parámetros utilizados en otros países europeos, rompiera con los estereotipos de la extrema derecha española y consiguiera atraer a los sectores sociales que habían sido ajenos a la misma hasta el momento. Ambos proyectos, plagados de contradicciones y expuestos a una abierta hostilidad desde el resto de las fuerzas de extrema derecha, acabaron diluyéndose a causa de las divisiones internas y la falta de respuesta positiva por parte de los ciudadanos. Pues los núcleos directivos de la ultraderecha permanecieron fieles a los postulados del nacional catolicismo o del fascismo español y centraron sus esfuerzos en la elaboración de un discurso apocalíptico que identificaba la democracia con la *antiEspaña* y todos los males posibles, al tiempo que presentaba al franquismo como un tiempo caracterizado por la paz social y el progreso económico.

El anuncio por el gobierno de una convocatoria electoral para junio de 1977, las primeras elecciones libres desde febrero de 1936, pone en marcha la estrategia electoral de la extrema derecha. Esta estrategia, dirigida a llevar al parlamento la voz de un partido neofranquista o neofascista fuerte, fracasa de forma estrepitosa. Hay que tener en cuenta que ese tipo de formaciones provocan un rechazo generalizado entre los votantes, quienes les identifican con la represión franquista y las ideas más reaccionarias de la dictadura y, asimismo, que las fuerzas de extrema derecha y neofascistas están además divididas (tres partidos neofalangistas, Fuerza Nueva, Confederación de ex Combatientes...); esa división tiene más que ver con desavenencias personales entre sus dirigentes que con diferencias a nivel ideológico. Además, la aceptación de la reforma política por los núcleos moderados del franquismo no sólo deja a la extrema derecha sin un aliado en potencia, sino que va a privarla de un número considerable de votantes en los sucesivos procesos electorales. El hecho de que Alianza Popular, principal aglutinante de la clase política franquista partidaria de una reforma limitada, acepte el proyecto diseñado por el gobierno de Suárez y la Constitución aprobada por las nuevas Cortes (aunque este segundo paso supuso que los sectores más conservadores abandonaran el partido) es un elemento importante para la consolidación de la democracia (que no se da en el caso de la Segunda República), pues va a suponer que buena parte del franquismo sociológico confíe en el discurso de conocidos ex cuadros del franquismo y acepte con normalidad la democracia.

La llamada a las urnas fue respondida con una coalición denominada Alianza Nacional 18 de Julio, integrada por Fuerza Nueva (FN) y Falange Española de las JONS (FE-JONS). Este frente disfrutó de una notable visibilidad gracias a la celebración de actos públicos destinados a conmemorar episodios relacionados con la victoria de las

fuerzas nacionales en la guerra civil y a la concentración anual del 20-N, el 20 de noviembre, para rendir homenaje al líder falangista José Antonio Primo de Rivera y a Francisco Franco, ambos fallecidos en esa fecha de los años 1936 y 1975, respectivamente; el lugar escogido fue la madrileña plaza de Oriente, ante el palacio real, escenario años atrás de concentraciones en apoyo a Franco y su régimen. El 20-N de 1976 se celebró tan sólo dos días después de que las Cortes aprobasen la reforma política. Los gritos y pancartas preparadas para ese evento reflejaban el descontento de sus organizadores ante la marcha de los acontecimientos: “¡Franco resucita, España te necesita!”, “¡Suárez dimisión, por perjurio y por masón!”.

En ese *frente nacional* no estaban todos los que cabía imaginar, pues faltaban varias agrupaciones falangistas. Ello se debe a que la relación entre los distintos sectores falangistas era pésima, a causa de la competencia por la adjudicación de la denominación FE-JONS; pues los distintos cabecillas habían imaginado, erróneamente, que tenían en sus manos un capital político que depararía una alta rentabilidad electoral, prueba evidente de su desconexión con la realidad del país. El grupo liderado por el *camisa vieja* Raimundo Fernández Cuesta, el más dispuesto al entendimiento con FN, había obtenido del gobierno el derecho a su utilización, y el resto de grupos, es decir, Falange Española Auténtica, Círculos Doctrinales José Antonio y Falange Española Independiente, le acusaron de *francofalangista* y juego sucio.

Mientras estas iniciativas tenían lugar, integrantes del denominado búnker neofranquista apostaban por reventar el proceso de transición, mediante provocaciones y el empleo de la violencia. Con este fin utilizaron a jóvenes integrados en la Primera Línea de FE-JONS y Fuerza Joven, así como a activistas salidos de esas mismas filas para conformar el Frente Nacional de la Juventud, en Barcelona, y Frente de la Juventud, en Madrid. Algunos de estos militantes participaron en atentados terroristas que contaron con el apoyo operativo y la protección de medios policiales, los cuales estaban destinados a amedrentar a la izquierda y crear desasosiego en el conjunto de una opinión pública a la que se pretendía empujar a posiciones de *orden y autoridad*. El más importante, la *matanza de Atocha*, tuvo lugar en Madrid el 24 de enero de 1977, cuando un comando asesinó a cuatro abogados laboristas vinculados al sindicato comunista Comisiones Obreras y a un administrativo y dejó heridas a otras cuatro miembros del bufete.

En las elecciones la extrema derecha se llevó una gran desilusión. La citada coalición alcanzó un porcentaje de votos muy reducido: el 0,84% de los sufragios, 154.413

votos. El respaldo de la Confederación de ex Combatientes había sido poco entusiasta, a causa de los lazos de Girón con los dirigentes de Alianza Popular: Girón había procurado la integración de este partido en la coalición ultraderechista y, al no conseguirlo, prefirió que los votos de quienes confiaban en él fuesen a parar a Manuel Fraga y no a Piñar. El programa falangista, copiado más que inspirado en el de los años treinta, despertó escasos entusiasmos, y lo mismo sucedió con el de Fuerza Nueva. Falange Española Auténtica obtuvo 40.978 votos. La extrema derecha neofranquista y los neofascistas quedaron fuera del parlamento.

Para mejorar sus resultados los líderes de las distintas organizaciones se vieron obligados a negociar hasta alcanzar un acuerdo más amplio de cara a las elecciones de marzo de 1979. Pensaban que sería posible rentabilizar los votos negativos registrados en el referéndum constitucional de diciembre de 1978. La nueva Constitución había sido aprobada en las Cortes, por una gran mayoría parlamentaria, y mediante referéndum nacional. Pero los votos negativos, el 7,9% en el conjunto del territorio nacional y el 10,2% en Madrid, estimulaban las expectativas de la extrema derecha. Además, ahora parecía posible contar con el respaldo de la derecha más conservadora, una vez que dos de los partidos integrantes en Alianza Popular, Acción Democrática Española y Unión Nacional, se habían separado del partido fundado por Fraga después de que la junta nacional recomendase el voto afirmativo en la campaña del referéndum constitucional. Para Fuerza Nueva y Falange la incorporación de Silva Muñoz y Fernández de la Mora, ministros en los últimos gobiernos de Franco, podía ser importante dado que se trataba de figuras bien conocidas por la opinión pública conservadora y que podían dar una mejor imagen a partidos que habían aparecido repetidas veces en la prensa relacionados con atentados terroristas y acciones violentas cometidas por sus militantes. Asimismo, su presencia habría servido para atraer a otros miembros de Alianza Popular, algo que hubiera dejado a Fraga en una situación muy deteriorada. El propio Fraga mantuvo diversas entrevistas y realizó numerosas declaraciones durante estos meses encaminadas a evitar esa posibilidad. Su artículo “La derecha posible”, publicado en el diario conservador *ABC* el 16 de enero de 1979, tenía como objetivo cerrar el camino a una hipotética alianza que “incluyendo mezclas pueda convertirse en explosivo” y a la que se hubieran sumado “una serie de personalidades y movimientos dispares, muchos de ellos orientados a visiones nostálgicas de un mundo que no ha de volver”. Finalmente, Silva y Fernández de la Mora no llegaron a un nuevo acuerdo con Fraga pero optaron

por desechar, asimismo, la alianza con Fuerza Nueva y Falange.

De forma que la coalición ultraderechista, denominada Unión Nacional, aglutinaba ahora a FN, FE-JONS, Círculos Doctrinales José Antonio, Confederación de ex Combatientes y Agrupación de Juventudes Tradicionalistas. La imagen de unidad, unos mayores recursos económicos, el apoyo prestado por los diarios *El Alcázar*, portavoz de la Confederación, y, más importante, del refundado *El Imparcial* y el retroceso de Alianza Popular permitieron cosechar un mayor número de votos, 414.071, el 2,31%. Los 110.730 votos alcanzados en Madrid dieron a la coalición un escaño en las Cortes, en la persona de Piñar, el único obtenido por este tipo de formaciones desde el restablecimiento de la democracia hasta nuestros días. Alianza Popular obtuvo 300.000 votos menos que en 1977, que se repartieron entre el partido de Suárez, Unión de Centro Democrático (UCD), y Unión Nacional. Las fuerzas de extrema derecha hicieron todo lo posible por erosionar a Alianza Popular, calificando a este partido de “derecha vergonzante”, y a Fraga de “despreciable personalidad política”, al tiempo que le situaban en la órbita de la supuesta “conjura internacional antiespañola”. En términos proporcionales la extrema derecha debería haber obtenido un mayor número de diputados, pero la ley electoral española está diseñada para primar a las grandes formaciones y dificultar el acceso al parlamento de los pequeños partidos de ámbito nacional (lo que no sucede en el caso de los partidos de ámbito autonómico).

En las elecciones municipales la extrema derecha consiguió algunas concejalías en poblaciones de la España agraria, pero su presencia era nula en las grandes ciudades, y lo mismo cabe decir de los parlamentos de Cataluña y País Vasco. Y aunque FN y FE-JONS disponían ya de sedes y una militancia fiel en casi todas las ciudades importantes, y FN de una revista semanal, *Fuerza Nueva*, que tiraba 45.000 de ejemplares, los activos políticos resultaban ser irrelevantes si de lo que se trataba era de actuar desde las instituciones.

El regreso de las teorías conspirativa. La estrategia golpista

El escaso número de votos obtenido en los comicios, frente al partido gobernante y la oposición representada por el PSOE y otras formaciones, intentó ser justificada por los dirigentes de la extrema derecha con el argumento de que los electores habían sido *engañados*, o que estaban *anestesiados* por una nebulosa de organizaciones y medios de comunicación detrás de los cuales seguro que estaba la mano de la masonería o, peor aún,

del judaísmo internacional, siempre muy activo, se decía, mediante múltiples formas (masonería, comunismo, socialismo, liberalismo). Pero, *engañados* o no, lo cierto es que los ciudadanos no confiaban en los antidemócratas. De forma que los resultados obtenidos en las urnas terminaron de convencer a la extrema derecha civil y militar de que la única posibilidad de ver cumplidas sus aspiraciones residía en que los militares involucionistas se decidieran a dar un golpe de Estado.

Para sus planes contaban con algunas bazas a favor. La principal el hecho de que una parte importante de los puestos clave en las Fuerzas Armadas estaba en manos de oficiales que habían sido muy fieles a Franco y que se identificaban con los valores constitucionales en escasa o ninguna medida; por esta misma razón estos militares no precisaban de mucho estímulo para conspirar contra el régimen democrático, y de hecho los preparativos golpistas se habían puesto en marcha ya en 1977. Además, los españoles vivían entonces una gravísima escalada terrorista de ETA (12 víctimas en 1977, 68 en 1978, 76 en 1979, 91 en 1980, con los militares como blanco preferente), el deterioro de la economía (14% de inflación, 16,5% de desempleo), y la crisis del partido gobernante, la cual desestabilizaba la situación política y económica; las disputas internas también afectaban al PSOE, pero en UCD la lucha por el poder alcanzaba cotas inimaginables, aderezadas por cuestiones de orden ideológico, como la ley del divorcio. Los conspiradores decidieron aprovechar esa difícil coyuntura para, presentándose como *salvadores de la patria*, terminar con el régimen democrático, al que señalaban como responsable de todos los problemas.

Se va a ensayar la estrategia de la tensión, cuyo fin último es la destrucción de las instituciones democráticas. De este tipo de estrategia existen abundantes precedentes en la Italia de la década de los setenta, en países iberoamericanos, en el transcurso de la segunda mitad del siglo XX, y por supuesto en la España de los años treinta. En una primera etapa el objetivo marcado es la desestabilización de la vida política del país. Esto se consigue mediante la creación de situaciones de desorden y ansiedad (tal es el caso de la matanza de Atocha), la manipulación de los problemas existentes en el país y los conflictos desencadenados por otras fuerzas sociales y políticas, lo que suponía instrumentalizar los atentados terroristas cometidos por ETA y GRAPO, presentándolos como expresión de un supuesto vacío de poder. En una segunda fase, una vez creado el ambiente propicio, consistente en una cierta sensación de inseguridad, que en realidad está presente en el desarrollo del proceso de transición por las razones ya citadas, y habiendo conseguido que la intervención militar apareciera para determinados sectores de población y círculos

económicos y políticos como algo ineludible, se presiona a las fuerzas armadas, o a un sector de las mismas, para empujarlas a dar un *golpe de timón* (salida blanda) o un golpe de estado (salida dura).

De acuerdo con estos planteamientos, las fuerzas de extrema derecha van a continuar idealizando el pasado franquista, describiendo la dictadura como un tiempo de paz, trabajo y progreso económico. Pero cada vez dedican más espacio a los mensajes de contenido catastrofista, y presentan la intervención militar en la vida política como algo imprescindible para el funcionamiento y desarrollo de la vida nacional, al tiempo que ofrecen la imagen de un amplio apoyo civil a los planteamientos involucionistas. El mismo propósito alienta las concentraciones del *20-N*, organizadas por la Confederación de ex Combatientes. Las cifras ofrecidas sobre el número de asistentes han sido muy discutidas; por ejemplo, al *20-N* de 1980 acudieron 350.000 personas según fuentes policiales y más de un millón según los organizadores. Lo cierto es que congregaban una notable asistencia, atraída por los discursos nacionalistas, en sentido españolista, y de exaltación de la figura de Franco. Pero buena parte de ese franquismo sociológico acudía a estos actos sin darle un estricto sentido partidista y a la hora de votar lo hacía a favor de la derecha conservadora o a la coalición centrista.

Esa tarea, la de hacer creer al conjunto de la opinión pública que existe un amplio apoyo a una fórmula no democrática para la salida de la crisis, es la principal de entre las desempeñadas por la extrema derecha, y es realizada con cierto éxito, mientras que otras resultan mucho menos relevantes de lo que en un principio pudiera pensarse; pues, como se ha dicho, los sectores antidemocráticos del ejército no necesitaban que nadie hiciera llamadas de signo anticonstitucional para adentrarse por ese camino. La campaña gana en intensidad tras las elecciones de marzo de 1979. Lo hace mediante el falseamiento, deformación, o simple omisión de la información, haciendo uso de *datos* no demostrados para sembrar el desconcierto y provocar en los lectores sentimientos antidemocráticos. La aparición de episodios de violencia política y cualquier tipo de problema de índole social eran siempre presentados como si se tratase de fenómenos exclusivos de los regímenes democráticos, y la construcción del Estado de las autonomías, conforme al modelo constitucional, como la desmembración de España. En esta escalada provocativa son piezas esenciales los sucesivos titulares de *El Alcázar* y *El Imparcial* (bajo la batuta de Julio Merino y Fernando Latorre tras la salida de la dirección de Emilio Romero), y los artículos elaborados o firmados por oficiales o colectivos militares golpistas. Por ejemplo, en la portada de *El Alcázar* de 4 de enero de 1979 puede leerse sobre el asesinato del

gobernador militar de Madrid, general Ortiz Gil, cometido por ETA el día anterior: "El asesinato del gobernador militar de Madrid, una agresión contra España. La ETA marxista, responsable. El Gobierno, culpable". Y esto no era más que el comienzo. En el transcurso de los meses siguientes las interpretaciones apocalípticas estuvieron en boca de todos los dirigentes de la extrema derecha y en la de algunos portavoces de la derecha conservadora. A menudo, como hizo Girón en julio de 1979, para establecer paralelismos entre la situación que entonces vivía España y la inmediatamente anterior al estallido de la guerra civil:

"Yo vengo, de alguna manera, a ponerlos en pie de lucha (...) No descubro ninguna novedad si sostengo que son muchos los compatriotas que piensan que las circunstancias de erosión o destrucción que hoy advertimos en el edificio del estado son análogas a las que pudieron advertirse, de una forma patente, cuando mediaba la década de los treinta. Pues no, amigos: las circunstancias actuales son infinitamente más graves, más duras, más trágicas, más angustiosas".

Asimismo, elemento principal de esta estrategia de la tensión es la aparición de una serie de artículos firmados por militares con su nombre real o seudónimo en la revista *Reconquista*, el semanario, *Heraldo Español*, fundado en marzo de 1980 por Merino y Latorre, y el diario *El Alcázar*. En este último aparecieron, entre finales de 1980 y comienzos de 1981 una serie de artículos firmados con el seudónimo de *Almendros*, bajo el que se esconden varios militares y civiles. El aparecido el 1 de febrero de 1981 lleva por título "La decisión del mando supremo" y sale a la luz poco después de la dimisión de Suárez como presidente del gobierno, como consecuencia de la presión militar contra su persona y la división que estaba destruyendo UCD. Este artículo implica al rey Juan Carlos I en la dimisión de Suárez, critica la actitud de los partidos políticos y expone que la prolongación de una situación de interinidad o crisis "instauraría la oportunidad para una legítima intervención de las Fuerzas Armadas". Entre tanto, el grupo de Girón, coordinado por Juan García Carrés, desempeña el papel más relevante de la trama civil del golpe, tendiendo puentes en medios militares, como es el caso del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, y distribuyendo los medios económicos necesarios.

Finalmente el 23 de febrero de 1981 se produjo un intento de golpe de Estado, cuya manifestación principal consistió en la ocupación del Congreso de los Diputados y secuestro de todos los diputados por unidades de la Guardia Civil, mientras en la ciudad de Valencia el capitán general, Milans del Bosch, ordena la ocupación con tanques del centro de la ciudad. El golpe fracasó gracias a la intervención del rey Juan Carlos I, quien ha apostado por la democracia, y por la voluntad de unas fuerzas armadas fieles al mandato

constitucional o que simplemente se pusieron a las órdenes del rey. La precipitación en los preparativos golpistas también es un hecho a tener en cuenta, al igual que la falta de coordinación entre los distintos participantes y la ausencia de acuerdo sobre cuál debía ser el resultado final de la operación.

La apuesta por el voto xenófobo

El fracaso de la insurrección militar, la pésima imagen ofrecida por los militares juzgados por su responsabilidad en aquellos hechos y la desarticulación de otra operación de este signo al año siguiente, y que ahora incluía a la Corona entre sus objetivos, terminaron por aportar los virus suficientes como para vacunar a las fuerzas armadas contra este tipo de males. Obviamente la desilusión se extendió en las filas de la extrema derecha, como reflejan los resultados obtenidos en las elecciones generales de octubre de 1982: FN obtuvo 20.139 votos en Madrid, mientras que el partido del golpista Tejero, Solidaridad Española, se quedaba en 8.994, aunque mucho peor le fue a FE-JONS, con 79 votos. Unas semanas después FN celebró el *20-N* anunciando la disolución del partido. Además, los rituales del *20-N* perdieron capacidad de convocatoria.

Ninguna organización ha cubierto el vacío dejado por Fuerza Nueva. Los grupos, sin apenas estructura organizativa, que a partir de 1982 se han presentado a las elecciones, como Juntas Españolas, han obtenido resultados muy bajos, y además decrecientes, inferiores al 1% en el conjunto del Estado. Todos ellos se han visto afectados por una serie de situaciones percibidas negativamente por la mayoría de los ciudadanos, y también por sus posibles votantes. Entre ellas figura la incapacidad para acometer, como han hecho la mayor parte de sus homólogos europeos, un proceso de renovación programática que los cambios en el ámbito cultural e internacional demandaban irremisiblemente. Asimismo, la asociación que la mayor parte de la opinión pública ha establecido entre formaciones de extrema derecha y acciones violentas y terrorismo. A ello ayudó la aparición en Madrid de Bases Autónomas, grupo neofascista que a partir de 1983 captó universitarios en varias facultades y cabezas rapadas entre las peñas de hinchas radicales de una serie de equipos de fútbol, principalmente el Real Madrid; canalizó una estética agresiva en *graffitis* y publicaciones y sus militantes cometieron numerosas agresiones sobre políticos *del sistema*, estudiantes de izquierda y seguidores de equipos rivales. A partir de este grupo se crearon en España las primeras bandas de cabezas rapadas vinculados a la ultraderecha, imitadores de los *skinheads* británicos y dedicados a la caza de *rojos*,

homosexuales e inmigrantes, preferentemente africanos, con el resultado de varios muertos.

Entre los elementos negativos también debe citarse su división, en buena parte por la falta de un líder indiscutido, de *un Le Pen español*, sin olvidar la competencia que ha supuesto la aparición de partidos autoritarios y xenófobos con amplia financiación, como el Grupo Independiente Liberal creado por Jesús Gil. Y por supuesto el convencimiento de quienes con ellos simpatizan de que darles el voto significa debilitar a la única formación de derechas con posibilidades, el Partido Popular, y facilitar el trabajo de los socialistas, al frente del gobierno entre 1982 y 1996. Y aunque cabía la posibilidad de que la llegada al gobierno del Partido Popular le supusiese a esta formación una pérdida de votos por su derecha, muy especialmente durante los años en que careció de mayoría suficiente para gobernar en solitario y tuvo que negociar con los partidos nacionalistas, eso no sucedió. Tampoco cuando, entre 2000 y 2004, disfrutó de mayoría absoluta: la extrema derecha siguió siendo inexistente y, además, una serie de dirigentes del partido cubrieron con un discurso propio de la derecha *dura* ese flanco, no dudando en relacionar el aumento de la delincuencia y de la inseguridad ciudadana con el aumento del número de inmigrantes.

De forma que en la actualidad España forma parte de la lista, muy reducida, de naciones europeas en las que los partidos de extrema derecha carecen de representación en las instituciones. El contraste respecto a Francia, Italia, Noruega, Dinamarca, Suiza, Austria, Holanda y otros países explica por qué la extrema derecha española se encuentra inmersa en una fase de desorientación, al tiempo que da los primeros pasos de cara a la renovación, si bien una parte de las formaciones ha continuado alimentándose del sentimiento de nostalgia hacia el franquismo y el fascismo histórico. Sin duda alguna quienes han optado por la renovación y romper lazos con el pasado, o al menos disimularlos en la medida de lo posible, lo han hecho deslumbrados por la rentabilidad obtenida por otros partidos de extrema derecha con el discurso xenófobo.

Así, el discurso centrado en el rechazo a los inmigrantes de escasos o nulos recursos económicos, cuyo número ha aumentado muy rápidamente en nuestro país durante los últimos años, y diferenciados de los *españoles* por sus rasgos físicos, cultura o religión, constituye en la actualidad la pieza principal de su programa. En ellos tampoco falta el rechazo, disimulado a duras penas, a la democracia política, y a los estatutos de autonomía de las regiones y a los organismos supranacionales en los que actualmente se integra España, muy especialmente la Unión Europea. Entre los

minúsculos partidos que han apostado por la renovación y se mantienen activos figura Democracia Nacional. Este partido salió a la luz a comienzos de 1995 como continuación del fracasado proyecto de Alternativa Democrática Nacional, denominación legalizada en 1994 para participar en las elecciones europeas de ese año y cuya candidatura era encabezada por Juan Peligro, procedente de Juntas Españolas, un partido de tendencia neofranquista que se había visto obligado a la autodisolución a comienzos de los noventa. Los dirigentes de Democracia Nacional (DN), en la que también se integraron miembros de la disuelta organización neonazi CEDADE, tenían claro cual era el modelo ideológico a seguir y también la estrategia, que pasa por obtener representación en algunos ayuntamientos o comunidades autónomas para, desde esa plataforma (como Le Pen desde Marsella o Haider desde Carintia), ir extendiendo su mensaje y alcanzar representación en otras comunidades y dar el salto al parlamento nacional; un proyecto que Jesús Gil, adalid del Grupo Independiente Liberal (GIL), ya había puesto en marcha en 1991: Marsella, otras poblaciones de la Costa del Sol, campo de Gibraltar, y a continuación Ceuta y Melilla

En su caso la influencia lepenista se percibe muy especialmente en el énfasis puesto en la defensa del *patrimonio de la comunidad* y en la afirmación de que unas etnias no son superiores a otras, son distintas; eso es algo que todos sabemos pero la conclusión que los dirigentes de DN toman de sus camaradas del norte es que las diferencias son un elemento fundamental para la supervivencia de las naciones y que no deben suprimirse con el mestizaje y, asimismo, que las razas deben vivir separadas. Los contenidos xenófobos puestos en circulación se inspiran siempre en el trabajo realizado por el Frente Nacional francés: *Los franceses primero* se convierte aquí en “Paro+inmigración= Delincuencia. Alto a la invasión. Los españoles primero”. Bajo estos presupuestos España debería hacer frente en nombre de su *identidad*, al proceso de globalización económica, política y cultural. De cara a las elecciones legislativas celebradas en marzo de 2.000, DN conformó la denominada Plataforma 2.000, la cual incorporaba a otros tres partidos, absolutamente desconocidos y más bien inexistentes (Partido Nacional de los Trabajadores, Movimiento Social Republicano y Vértice Social Español). No obstante esa campaña contó con el apoyo del hombre de Le Pen en España, Alain Lavarde, ex paracaidista, como su jefe, y ex miembro de la organización terrorista OAS, pro Argelia francesa, y en la citada plataforma ha desempeñado un papel principal el grupo valenciano que coordinan dos empresarios, el ex falangista José Luis Roberto y el ex miembro de Fuerza Nueva Salvador Gamborino. Lo más sugerente del texto programático ("Tu nación, tus derechos") es el hecho de que la

inmigración figura con un peso específico en el conjunto de los 6 apartados que componían el cuadernillo electoral de 8 páginas:

- I. Nuestro lema: *Tu nación. Tus derechos.*
- II. Contra el desempleo y la precariedad laboral. Contra las ETT'S.
- III. Más empleos dignos en lugar de mano de obra barata extranjera inmigrante.
- IV. Abaratamiento de la vivienda. Estabilidad en el empleo. Ayudas a la mujer para fomentar la natalidad.
- V. Por la solidaridad nacional contra el separatismo y el mundialismo.
- VI. Por una verdadera democracia".

Evidentemente el aumento de los sentimientos xenófobos entre nosotros, recogido en distintas encuestas y traducido ya en comportamientos lamentables en espectáculos deportivos y en agresiones en las calles de algunas poblaciones (Terrassa, El Ejido, Elche) ha supuesto un estímulo para la extrema derecha. Y sus organizaciones han propiciado las actitudes violentas. Por ejemplo, cuando en julio de 1999 se produjeron incidentes xenófobos en Terrassa (Barcelona) militantes del grupo neonazi catalán Estado Nacional Europeo participaron en los mismos y difundieron una octavilla en la que se reivindicaba el "racismo de los pobres", y se pedía a los habitantes del barrio de Ca n'Anglada una reacción contra "gentes del colectivo ilegal moro". Asimismo, por lo que se refiere a El Ejido sabemos que militantes ultraderechistas tomaron parte en los incidentes e hicieron todo lo posible por agravar la situación. De hecho, desde una página *web* de Internet, bajo el epígrafe "Arde Almería", fue convocada una manifestación y anunciada la participación de Plataforma 2000, al tiempo que se expresaba el siguiente deseo: "Espero que esta noche Almería recuerde el Ulster".

Al aumento de los contenidos xenófobos hay que añadir el matiz, importante, de que tras los atentados terroristas del *11 M* en Madrid, en marzo de 2004, el rechazo a la inmigración islámica constituye el elemento dominante en el discurso de estos grupos. Así se percibe en las páginas de la revista *La nación*, que aparece cada tres semanas y que es heredera de los planteamientos del desaparecido diario *El Alcázar*, también en las actividades patrocinadas por el grupo editorial Fuerza Nueva, entre ellas una conferencia titulada "El Islam al asalto del occidente cristiano. Lepanto", así como en el boletín y página *web* de Democracia Nacional: "España mañana, será musulmana. Si no haces nada por evitarlo". Sin embargo, por el momento, la renovación de los programas, apostando por el voto xenóforo, no se ha traducido en un aumento del número de votos obtenido. Lo mismo cabe decir de quienes se definen "a la derecha del Partido Popular" o "verdaderamente de derechas", como es el caso del Partido de Acción Democrática

Española, si bien este partido ha conseguido mejores resultados y concejales en diversos ayuntamientos. También hay que decir que los impulsores de la renovación no han tardado en dar muestras de desconcierto por el nulo rendimiento obtenido por su estrategia. Tal vez porque no se han detenido a reflexionar sobre el hecho de que, a diferencia de otros países europeos, el debate sobre la inmigración ha sido introducido en nuestro país por otras fuerzas políticas, la derecha y los nacionalistas, y que a ellos les va a resultar muy difícil desempeñar un papel relevante en este terreno.

Así pues, las diversas publicaciones y partidos de extrema derecha se mantienen como espacios para la supervivencia de ideas antidemocráticas y racistas gracias a un ejercicio voluntarista y al estímulo que suponen los resultados electorales obtenidos por otras formaciones que operan en Europa. No obstante, lo sucedido en otros escenarios europeos nos habla de la posibilidad de que el discurso xenófobo, e incluso abiertamente racista, acabe siendo rentable en España.

Bibliografía

Andrés, Jesús de, “¡Quieto todo el mundo! El 23-F y la transición española”, *Historia y Política*, nº 5 (2001), pp. 55-87.

Cea D’Ancona, M^a Ángeles, *La activación de la xenofobia en España*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2004.

Casals Meseguer, Xavier, *La tentación neofascista en España*, Barcelona, Plaza y Janés, 1998.

- *Ultrapatriotas. Extrema derecha y nacionalismo de la guerra fría a la era de la globalización*, Crítica, 2003.

Epstein, Simon, “Extreme right electoral upsurges in Western Europe: The 1984-1995 wave as compared with the previous ones”, *Acta*, nº 8, 1996.

Ignazi, Piero, “The silent counter-revolution. Hypotheses on the emergence of extreme right-wing parties in Europe”, *European Journal of Political Research*, nº 22 (1992), pp. 3-34.

Ignazi, Piero; Ysmal, Colette, “New and old extreme right parties. The French Front National and the Italian Movimento Sociale”, *European Journal of Political Research*, vol 22/I (julio 1992), pp. 101-121.

López Nieto, Lourdes, *Alianza Popular. Estructura y evolución electoral de un partido conservador*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1988.

O’Donnell, G.O.; Schmitter, Ph. C.; Whitehead, L. (comps.), *Transiciones desde*

un gobierno autoritario. Vol. III. Perspectivas comparadas, Buenos Aires, Paidós, 1989.

Rodríguez Jiménez, J. L., *Reaccionarios y golpistas. La extrema derecha en España: Del tardofranquismo a la consolidación de la democracia (1967-1982)*, Madrid, CSIC, 1994.

- *La extrema derecha española en el siglo XX*, Madrid, Alianza Editorial, 1997.
- *La extrema derecha europea*, Madrid, Alianza Editorial, 2004.
- “La evaporación de la extrema derecha. Camada negra”, *La Aventura de la Historia*, nº 85 (noviembre 2005), pp. 50-55.

SOS Racismo, *Informe Anual 2005 sobre el racismo en el Estado español*, Barcelona, Icaria, 2005.

VV.AA. *La extrema derecha en Europa. Del prenazismo a la actualidad*, Barcelona, Mundo Revistas, 2002.

